



# **Observatorio de Políticas Públicas**



Coordinación General del Cuerpo de  
ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

## **INDUSTRIAS CULTURALES**

CAT. OPP/CAG/2005-16

NORMATIVA AREA DE LA CINEMATOGRAFÍA Y EL VIDEO

NORMATIVA AREA DE LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

NORMATIVA AREA DE RADIO Y TELEVISIÓN

NORMATIVA AREA DE LA MÚSICA

NORMATIVA TRANSVERSAL. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ORGANIZACIÓN

**DICIEMBRE DE 2005**

**Autores:**

*AG Héctor Schardgorosky*

*AG Dalmiro Platini*

*Este documento fue producido por los responsables del Area Temática “Industrias Culturales” del Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el mes de diciembre del año 2005.*

*El Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales inició sus actividades en el año 2002 en jurisdicción de la Coordinación General del C.A.G., sus documentos son publicados en el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros.*

*Sitio Oficial: [www.cag.jgm.gov.ar](http://www.cag.jgm.gov.ar)*

*AG V. Daniel Piemonte  
Coordinador General  
Cuerpo de Administradores Gubernamentales*

*AG Guillermo J. Alabés  
Coordinador Ejecutivo  
Observatorio de Políticas Públicas*

# Industrias Culturales

## Cuadro de situación

### 1.- Introducción

El concepto de las industrias culturales es relativamente nuevo. La serialización, la estandarización, la división del trabajo, y el consumo de masas que le son inherentes, fueron los principales factores que llevaron a los filósofos de la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer a bautizar con el término de Industrias Culturales dicho fenómeno, simultáneo de la sociedad de masas, de la globalización de la economía y de la transnacionalización de la cultura.

Para los filósofos alemanes, el poder de la radio y del cine, así como la creciente influencia de la televisión, implicaba el quiebre de la cultura y su conversión en simple mercancía. La preocupación no era tanto la de indagar en la singularidad del fenómeno, como en la aparición de la “cultura de masas”. Esta fue así estigmatizada desde una visión sacralizadora del arte y del artista, para la cual el mercado asumía características de Apocalipsis cultural, en la medida que amenazaría la existencia misma de la capacidad creativa de los intelectuales y los artistas.

El término Industrias Culturales estuvo asociado desde los inicios de su empleo, casi medio siglo atrás, a las empresas de producción y comercialización de bienes y servicios culturales, destinados a su utilización (reproducción, almacenamiento, difusión) en el interior de un país o a nivel internacional. Se refiere a las actividades productivas y comerciales guiadas por una estrategia de rentabilidad económica a partir del trabajo de un artista o creador.

La producción en masa de bienes culturales tiene la misma lógica que la de cualquier otra industria de una sociedad de libre mercado: la de promover el consumo máximo. Por ello la búsqueda del público universal no solamente implica la estandarización, sino también dos procesos contradictorios y complementarios: sincretización y homogenización.

Desde una perspectiva más pragmática, se podría tratar de entender a las industrias culturales a través de su creciente participación en el producto bruto interno y en la balanza comercial. En este marco, información, comunicación y cultura constituyen un sistema integrado de la formación del conocimiento y de las conciencias, pero sobre todo un nuevo sistema de poder.

La importancia de las Industrias Culturales radica, entonces, en su incidencia sobre los procesos de desarrollo cultural o formativo, y además, en las relaciones de

poder existentes en el interior de cada sociedad o entre naciones. En ese sentido, las industrias de bienes y servicios culturales conforman una realidad irrecusable de nuestro tiempo, sirviendo a objetivos políticos y culturales además de los principales de rentabilidad económica.

Se podría afirmar entonces, debido a una cada vez mayor componente cultural en el consumo en general, que la definición de los bienes culturales es cada vez más abarcativa. Lo que queda en claro, es el impacto positivo que acarrea tanto económico como en la generación de empleo, y su función destacada en los procesos de reconocimiento e identificación con los productos o contenidos que reproduce, por parte de la sociedad.

Hay varias definiciones de lo que son las industrias culturales. El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CEDEM), ha definido a los bienes culturales agrupándolos en dos grandes conjuntos: uno formado por los medios para la transmisión y reproducción de los contenidos culturales, y otro por los contenidos mismos. Los primeros incluyen aparatos de cine, video, audio, fotografía y computación, mientras que en los segundos se encuentran los medios impresos (libros, revistas, diarios); sonoros (fonográfico y radiofónico); audiovisuales (artes visuales, video, cine, teatro, fotografía, radio y televisión) los juegos y bienes deportivos, los productos multimedia y los servicios de entretenimiento que dirigen sus actividades al tiempo libre dentro y fuera del hogar (parques de diversiones, salas de juego, recitales, bares, parques temáticos, etc.). También se incluye en la segunda categoría los bienes de promoción y publicidad de mercaderías, que crecieron en importancia en la segunda mitad de los años noventa y son generadores de pautas y comportamiento socioculturales.

Debe distinguirse que, cuando se hace referencia a Industrias Culturales no se está diciendo Industrialización de la Cultura. El término industrialización alude a la producción, efectuada en una fábrica, de determinados bienes destinados al consumo o a la producción de nuevos bienes. En el caso de la producción de bienes culturales, aunque existen procedimientos a menudo semejantes, ellos no son suficientes para conseguir automáticamente la rentabilidad que se busca en cualquier industria.

El talento de un autor, realizador o artista, y la factibilidad de comunicación con determinados públicos, son hechos no siempre reproducibles aunque sean indispensables para lograr el impacto comunicacional y comercial buscado. El artista, creador o diseñador de productos culturales incorporan, desde la singularidad de su labor, un valor agregado que constituye, para las industrias del sector, el valor más importante y decisivo para su supervivencia.

En contraposición a otros productos industriales, cada mercancía cultural tiene un valor de uso ligado a la personalidad del o de los creadores o trabajadores culturales que la han concebido. El papel del industrial consiste, principalmente, en

transformar un valor de uso único y aleatorio, en uno de cambio múltiple y efectivo. Por ello, se puede caracterizar la mercancía cultural desde un punto de vista económico por el carácter aleatorio de su valoración. Existe en el producto cultural algo diferenciado y peculiar, claramente relacionado con la esencia y la complejidad de la cultura de una sociedad, que hace que no sea industrializable.

Las Industrias Culturales se han convertido en los últimos decenios, en los medios de mayor impacto para la promoción de la cultura y de las artes, sin que ello sea impedimento alguno para el acrecentamiento de su poderío económico. La difusión y la reproducción del trabajo de los artistas más importantes de cada sociedad, ha sido el vector más potente para la difusión de las identidades y las culturas base de sus obras.

Las industrias culturales y los medios de comunicación social posibilitan una multiplicación del intercambio cultural entre las naciones y en el interior de cada comunidad. Potencializan a su vez la economía y el desarrollo integral de aquellas, constituyendo unas de las primeras bases de la industria y del comercio de las naciones más desarrolladas.

Esta múltiple funcionalidad, económica, política y cultural, de las industrias de bienes y servicios culturales y comunicacionales, constituye parte de la especificidad de las mismas y las diferencia de otras industrias, pese a sostenerse en estructuras productivas y comerciales que son semejantes a las de cualquier otra industria.

Ahora bien, en un mundo liderado por la tecnología de la información, las industrias culturales, tienen un alto potencial de crecimiento, por tratarse de actividades intensivas en conocimiento donde el contenido autóctono resulta imprescindible. Por ello mismo, y debido a que éstas industrias son trabajo intensivas (fundamentalmente las vinculadas con el desarrollo de contenidos), su crecimiento tiene un impacto significativo en el nivel de ocupación, sobre todo en los segmentos de mayor nivel de instrucción. De hecho, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, la participación de éstas actividades en el empleo total se ubica en el 4 % y contribuyen con el 6 % del valor agregado total.

Si tomamos en cuenta que la función básica de las entidades y actividades ligadas al sector de la cultura debe ser crear conciencia ciudadana, y que es a través de los bienes y servicios culturales dónde esto se manifiesta; que el escenario de las industrias culturales desborda constantemente sus límites y se extiende a la producción de bienes y servicios en general, debido al sentido cultural que inspira al consumo. Que si bien merece políticas a nivel tanto nacional, como provincial; es al mismo tiempo capaz de desarrollarse a partir de pequeñas iniciativas que pueden darse a nivel comunal o de pequeños emprendimientos.

Tomaremos conciencia que estamos ante un área productiva que, más allá de las dificultades por las que atraviesen las comunidades, tiene un enorme desarrollo potencial, un gran poder de convocatoria, tanto del sector público, como del privado y del tercer sector.

El Estado nacional aún no ha asumido el concepto de las industrias culturales, como un foco generador de políticas públicas. En realidad ha realizado una serie de acciones o actividades aisladas o no sistemáticas que en general tuvieron origen en emprendimientos de agentes, o funcionarios estudiosos del tema o especialistas de la actividad privada que ofrecieron su know how, pero no en un programa de actividades tendientes a la implementación de una generación de políticas permanentes sobre el tema. No obstante, estas acciones han dejado una serie de Normas, que a su vez crearon responsabilidades orgánicas y además asignación presupuestaria para el desarrollo de actividades públicas.

Si bien el Gobierno nacional ha creado un organismo cuyo nombre podría representar la atribución como foco generador de este tipo de políticas, como se verá, no hay un desarrollo uniforme de la actividad.

Haciendo un cruce de las normas específicas sobre el tema y los organismos que las aplican, con una asignación presupuestaria, podremos ver claramente como en algunos campos culturales se ha llegado a diseñar las condiciones para un desarrollo de la industria cultural del área; en cambio, otros no presentan las condiciones mínimas para que se pueda desarrollar una política activa.

Lo que es importante puntualizar, es que el desarrollo de actividades de las industrias culturales, tiene un efecto multiplicador que favorece otras políticas públicas prioritarias: generación de empleos, difusión cultural interna, producción de bienes exportables de alta identificación nacional.

## **2.- Normativa**

La normativa puede ser analizada por áreas culturales (cinematografía y video, música, libros, radio y televisión), pero también existen normas transversales que abarcan desde determinado aspecto a todas las otras (la propiedad intelectual).

### **2.1.- Área de la cinematografía y el video**

La Ley N° 17.741, de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional, más conocida como “ley del cine”, fue promulgada en 1968, y desde su vigencia ha tenido numerosas modificaciones o normas que la complementaron hasta su actual

conformación. Tiene varios aspectos que sirven de marco o regulan cuestiones de su industria cultural.

Un capítulo de la Ley desarrolla la definición del **organismo constituido como su autoridad de aplicación**: el **Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)**, que funciona como ente público no estatal del ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

Se le asignó a su cargo el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica nacional en todo el país y en el exterior. Su organización se estructura con un Director y un Subdirector designados por el PEN; una Asamblea Federal, presidida por el Director e integrada por Secretarios o Subsecretarios de Cultura de las jurisdicciones provinciales y un Consejo Asesor, integrado por 11 miembros designados por el PEN a propuesta de sectores específicos (5 por la Asamblea Federal; 2 por directores cinematográficos, 2 por los productores, 1 por los técnicos de la industria cinematográfica y 1 por los actores).

Cabe puntualizar que está a punto de obtener media sanción del Senado una modificación que incluye a los “exhibidores” dentro de los miembros del Consejo Asesor.

La Dirección tiene como principales deberes y atribuciones: ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina (formuladas por la Asamblea Federal); acrecentar la difusión de la cinematografía argentina; administrar el Fondo de Fomento Cinematográfico y fomentar la comercialización de películas nacionales en el exterior.

En tanto, la Asamblea Federal tiene como funciones y atribuciones principales: formular las medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales; proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la exhibición audiovisual y en especial a la preservación de las salas de cine; controlar acciones del Consejo Asesor y la Dirección y promover y fomentar la producción cinematográfica regional.

El Consejo Asesor aprueba o rechaza actos de la Dirección y designa los comités de selección para la calificación de los proyectos que aspiran a ser obtener los beneficios de la ley.

Otros capítulos de la Ley definen a las “películas nacionales” reguladas por la ley, y formulan la “cuota de pantalla”, que es el nivel de dedicación a las películas nacionales que las salas de exhibición deberán respetar como mínimo.

La Ley define además la integración del Fondo de Fomento Cinematográfico, administrado por el INCAA. Este incluye un impuesto del 10 % aplicable sobre el precio

básico de toda localidad para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país (cualquiera sea el ámbito donde se realice); un impuesto del 10 % aplicable sobre el precio de todo tipo de videograma grabado; el 25 % del total de las sumas percibidas por el COMFER en concepto de gravamen del artículo 75 de la Ley N° 22.285, de radiodifusión; el importe de intereses, multas y sanciones y otros de menor importancia.

El Fondo de Fomento Cinematográfico es aplicado principalmente, además de los gastos de personal y generales del INCAA; a subsidios a la producción y exhibición de películas nacionales; a créditos cinematográficos; a la participación en festivales cinematográficos de las películas nacionales; a la realización de festivales; a la producción, promoción o comercialización de las películas nacionales en el país y en el exterior; al mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, de la Cinemateca Nacional y de una biblioteca especializada y a la organización de concursos y el otorgamiento de premios.

Además, la Ley define el subsidio de las películas de largometraje que contribuyan al desarrollo de la cinematografía nacional en lo cultural, artístico, técnico e industrial y los requisitos exigido a dichas películas y las sumas máximas a otorgar.

Otro capítulo regula a los cortometrajes.

Por otra parte la Ley crea la Cinemateca Nacional, como dependencia del INCAA, estableciendo que los titulares de películas que reciban el subsidio previsto cederán la copia presentada al instituto (otra copia puede ir al Archivo General de la Nación, cuando la película es clasificada de interés especial).

Otro capítulo establece la existencia de un registro de empresas que integran las diferentes ramas de la industria y el comercio cinematográfico y audiovisual a cargo del INCAA. Este incluye a productoras de cine, televisión y video, distribuidoras, exhibidoras, laboratorios y estudios cinematográficos, así como empresas editoras, distribuidoras de videogramas grabados, titulares de videoclubes y/o todo otro local o empresa dedicados a la venta, locación o exhibición de películas por el sistema de videocassette o por cualquier otro medio o sistema.

Finalmente la Ley establece las sanciones correspondientes a quienes infrinjan sus normas.

Por otro lado se han establecido numerosas normas reglamentarias y complementarias de la “Ley del Cine”, que terminaron de operativizar sus preceptos. Algunas de las más significativas son:

- Resolución INCAA 559/95 (modificada por Res. INCAA 467/97), regulando la presentación de proyectos cinematográficos y el otorgamiento de créditos



- Resolución INCAA 460/96, regulando el otorgamiento de créditos para la realización de libros y guiones cinematográficos destinados a ser utilizados en películas nacionales de largometrajes
- Resolución AFIP, regulando el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos.
- Resoluciones INCAA sobre régimen de créditos (1195/97; 220/99; 472/00; 527/00; 1455/01; 1568/01; 411/02)
- Resoluciones INCAA sobre régimen de subsidios (170/98; 1281/98; 390/99; 341/02; 49/03; 940/05)

Como se observa, en el área de la “industria del cine y el video”, existe un marco legal bastante completo, y dinámico en cuanto a su actualización, que regula, entre otras cosas, políticas públicas sobre las diversas facetas del proceso productivo cinematográfico y además un organismo que centraliza la aplicación de dicha norma y que maneja o asigna fondos como para garantizar la continuidad de dichas políticas.

## **2.2.- Área de la producción bibliográfica**

La Ley N° 25.446, del Fomento del Libro y la Lectura, más conocida como “Ley del libro”, fue promulgada parcialmente en 2001 (y observada parcialmente por el PEN), y desde su vigencia no ha tenido modificaciones importantes. Tiene varios aspectos que sirven de marco o regulan cuestiones de su industria cultural.

La Ley define al libro y la lectura, como instrumentos idóneos e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura y establece que el régimen que se regula comprende la actividad de creación intelectual, producción, edición y comercialización del libro, o sea todas las facetas de esta industria cultural.

Los objetivos más importantes fijados para esta política integral son:

- Fomentar el trabajo intelectual de los autores nacionales, particularmente aquellos residentes en el interior del país, y la edición de sus obras.
- Incrementar y mejorar la producción editorial nacional dando respuesta a los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad.
- Preservar y asegurar el patrimonio literario, bibliográfico y documental de la Nación actualizando y desarrollando las bibliotecas y archivos públicos y privados.
- Proteger los derechos morales y patrimoniales de los autores y editores.
- Adoptar un régimen tributario de fomento para todos aquellos que intervienen en las actividades reguladas por la ley.
- Establecer una política federal para facilitar la información, estudios y perfeccionamiento de los autores y trabajadores de la industria del libro.
- Promover el acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias y sindicales, así como a los archivos, centros de información, documentación y difusión literaria.

- Adoptar medidas para dar acceso a todos y para fomentar la cultura del libro y de la lectura; el apoyo a autores, editores, comercializadores e industriales gráficos del libro, asegurándoles los estímulos, capitales, materias primas, equipos y servicios que garanticen el desarrollo sostenido y democrático de su actividad.
- Adoptar medidas para sancionar y erradicar las ediciones clandestinas y toda copia no autorizada de libros.

La ley establece expresamente el tipo de producciones que se incluye en su regulación.

Luego la Ley establece como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, la cual ejerce la Política Integral del Libro y la Lectura, con la asistencia de una Comisión Asesora del Libro, creada a tal efecto.

Dicha Comisión es presidida por el Secretario de Cultura se integra con el director de la Biblioteca Nacional; el director coordinador de la Biblioteca del Congreso de la Nación; el presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; 6 representantes de regiones culturales argentinas definidas, y un representante de cada uno de 7 sectores (el Consejo Federal de Cultura y Educación; la Fundación El Libro; la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara Argentina del Libro; la Cámara Argentina de Publicaciones; la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines y la Asociación de Bibliotecarios Graduados.

La Comisión Asesora del Libro tiene como funciones más importantes asesorar a la Secretaría de Cultura en la ejecución de la presente ley; apoyar la concertación de los intereses y esfuerzos del Estado nacional con el sector privado para el desarrollo sostenido y democrático de la industria del libro; proponer medidas para estimular y fortalecer el trabajo de los autores argentinos, la cultura del libro y de la lectura y la actividad editorial en general y proponer programas, planes y campañas provinciales, regionales y nacionales de lectura.

Para la aplicación de estas políticas la Ley crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, administrado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, destinado a financiar los proyectos, programas y acciones que ejecuten la Política Integral del Libro y la Lectura. Dicho Fondo se integra con la partida presupuestaria correspondiente; los recursos que se le asignen por leyes especiales; las donaciones y legados y las multas que se apliquen a los infractores de la ley.

Luego la ley define el fomento a la industria editorial, para lo cual se exime a la producción y comercialización de libros del Impuesto al Valor Agregado en todas sus etapas y asimismo define una serie de importantes exenciones impositivas eximiéndose de todo impuesto, tasa o gravamen a la exportación e importación de libros y complementos, o con reintegros para la exportación de libros editados y/o impresos en el país; o las exenciones a autores que editen y/o comercialicen sus propios libros.

Asimismo define el fomento de la demanda editorial y de los hábitos de lectura mediante campañas educativas e informativas; la organización de concursos literarios, exposiciones y ferias en el orden nacional, regional, provincial, municipal y del MERCOSUR; la adquisición de obras con destino a las bibliotecas públicas y populares, archivos y centros de documentación; la modernización de todos los centros bibliográficos y toda medida conducente a la democratización del acceso al libro y la lectura.

La ley analizada tiene aspectos que profundizan en cuanto a esta actividad, la regulación sobre la propiedad intelectual, definida en forma global (transversalmente para todas las actividades, como ya veremos), por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Aquí se especifican particularidades sobre el registro para la actividad y además se exime expresamente a los Derechos de autor del impuesto a las ganancias.

Finalmente esta Ley establece las sanciones correspondientes a quienes infrinjan sus normas.

Las únicas normas reglamentarias y complementarias de la “Ley del Libro”, fueron, por un lado el Decreto 932/01 que observó parcialmente la sanción original de la Ley y promulgó el resto y por otro La Ley 25.542 del 2001 que estableció que todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público o consumidor final de los libros que edite o importe. Asimismo establece los descuentos pasibles de aplicación y el material exento de esta norma. Al respecto establece además que la Secretaría de Cultura y Comunicación arbitrará los medios a fin de llevar un registro de editores, importadores y representantes. No obstante define como autoridad de aplicación de la Ley a la Secretaría de Industria de la Nación.

Como se observa, en el área de la “industria del libro”, existe un marco legal, que regula, entre otras cosas, políticas públicas sobre las diversas facetas de su proceso productivo y además hay organismos responsables sobre el área. Tal vez, la variedad y tipo de responsabilidades que llevan adelante secretarías como las que se encargan del tema no permita una dedicación más específica, como la que ya vimos en el área del Cine, con un órgano que funciona exclusivamente para esa política.

### **2.3.- Area de radio y televisión**

Sobre el tema la norma que regula la actividad es la Ley N° 22.285, de Radiodifusión, promulgada en 1980, que, desde su vigencia ha tenido numerosas modificaciones o normas que la complementaron hasta su actual conformación. Tiene algunos aspectos que sirven de marco o regulan cuestiones de su industria cultural, pero en general la Ley está más orientada al establecimiento de restricciones para el

otorgamiento de frecuencias (porque son limitadas) o de contenido ideológico (ya que fue una herramienta generada para eso en época de la dictadura militar).

La Ley delimita los servicios regulados, que comprenden a las radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras, de televisión o de otro género, estén destinadas a su recepción directa por el público en general.

Establece que la administración de las frecuencias y la orientación, promoción y control de los servicios de radiodifusión son competencia exclusiva del PEN, declarando a los servicios de radiodifusión de interés público.

Se delimita con precisión quienes pueden prestar estos servicios y los requisitos a cumplir.

Se establece al **Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)** como autoridad de aplicación de la Ley controlando y regulando la actividad, pero también se otorga una importante injerencia a la **Secretaría de Comunicaciones**, que es ante quien, por ejemplo, el COMFER debe gestionar la aprobación de proyectos y la inspección final de toda nueva instalación de servicios de radiodifusión o quien interviene previo a una variación de frecuencias o potencias adjudicadas o para muchas de las decisiones primarias del COMFER y la planificación política del área. La ley también menciona con funciones de planificación de la radiodifusión pública a la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación, las que actualmente han recaído en la Secretaría de Medios de Comunicación.

La Ley define al Servicio Oficial de radiodifusión (SOR) dependiente de la Secretaría de Comunicaciones, punto de partida del actual Sistema Nacional de Medios Públicos.

La ley define al COMFER como un organismo autárquico, dependiente del PEN con un Directorio formado por 1 presidente y 6 vocales designados por el PEN a propuesta del organismo que representan (Comandos en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, Secretaría de Información Pública, Secretaría de Estado de Comunicaciones y Asociaciones de Licenciarios de radio y televisión). No habiéndose podido adecuar la Ley, los gobiernos democráticos han tenido que gobernar esta sensible área a través de permanentes intervenciones.

Pero el capítulo más importante y polémico de la ley es el referido a las licencias para la prestación de servicios de radiodifusión. Si bien, hace muchos años que se viene intentando sancionar una nueva ley de Radiodifusión, todos los proyectos tratados en el Congreso Nacional derivaron en enormes polémicas de las que no hubo acuerdo definitivo y por ende no hubo nueva ley que reemplace a la de la dictadura militar. Y justamente los mayores conflictos surgieron en la discusión de este capítulo. Por eso es que se cambió la estrategia y previo a un tratamiento global de nueva ley se

está intentando adecuar sólo los artículos más polémicos y para en otra etapa emprender la reforma global.

Los aspectos polémicos giran en torno a 2 grandes temas: uno es el de la normalización de quienes operan actualmente los servicios, muchos de los cuales son considerados “clandestinos”, pero en realidad, muchos de ellos estarían dispuestos a normalizar su situación en un marco organizado y equitativo; el problema es que tampoco se puede garantizar que haya buenas frecuencias para asignar a todos. El otro conflicto pasa por sectores que podrían tener privilegios al ser autorizados a operar (las cooperativas, con un esquema impositivo diferente) creando problemas en aspectos de competitividad (Ley de defensa de la Competencia).

En otro capítulo se establece que los titulares de los servicios de radiodifusión pagarán un gravamen proporcional al monto de la facturación bruta, cuya percepción y fiscalización estarán a cargo de la Dirección General Impositiva con sujeción a las disposiciones de la ley 11.683. Esto, comprende lo que corresponde a la comercialización de publicidad, de abonos, de programas producidos o adquiridos por las estaciones y a todo otro concepto derivado de la explotación de los servicios de radiodifusión.

El COMFER administra dichos fondos y los destina a cubrir sus gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento, como así también al sostenimiento y desarrollo del SOR.

Finalmente la Ley establece las sanciones correspondientes a quienes infrinjan sus normas.

Por otro lado se han establecido numerosas normas reglamentarias y complementarias de la Ley de radiodifusión, muchas de las cuales tienen que ver con la definición de aspectos técnicos que operativizan sus preceptos, pero la gran expectativa de toda la industria cultural pasa por la implementación de una moderna ley de radiodifusión que se reclama desde el retorno de la democracia.

Sí cabe comentar el Decreto 94/01, que declaró disueltas y en estado de liquidación a las sociedades ATC SOCIEDAD ANONIMA y TELAM S.A.I. y P., dependientes de la Secretaría de Cultura. Por otro lado crea el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, en jurisdicción de la Secretaría de Cultura con el objeto de administrar, operar y desarrollar los medios y servicios de radiodifusión sonora y televisiva, periodísticos y de transmisión de contenidos y transfiere a dicho Sistema el dominio de los bienes muebles e inmuebles de ATC SOCIEDAD ANONIMA y TELAM S.A.I. y P., como así también los servicios de radiodifusión, periodísticos y de Agencia de Noticias y de Publicidad prestados por las mencionadas empresas y por las emisoras de radio integrantes del SOR. Finalmente redefine responsabilidades del COMFER.

Como se observa, en el área de la “industria de la radiodifusión”, existe un marco legal, que regula, entre otras cosas, algunas políticas públicas sobre las diversas facetas de su proceso productivo, pero que debe ser cambiado porque su concepción es inadecuada y en la práctica no es respetado por los sectores involucrados; además hay organismos responsables sobre el área, pero su concepción también está salpicada con preceptos inadecuados para un estado moderno y democrático. Seguramente, cuando se logre un nuevo marco jurídico también se redefinirá la concepción de la autoridad de aplicación.

#### **2.4.- Area de la música**

Finalmente, en este campo no existe un marco legal específico y abarcativo, quedando regulado por la “normativa transversal” a otras actividades, que es la ley de Propiedad Intelectual, y por normativa reglamentaria o complementaria de esta, con especificidad sobre el rubro musical y que incluye algunas políticas públicas sobre las diversas facetas de su proceso productivo y algunas atribuciones a entidades privadas con control de organismos públicos.

#### **2.5.- Normativa transversal. Ley de Propiedad Intelectual**

La Ley N° 11.73, de Propiedad Intelectual, fue promulgada en 1933 y desde su vigencia ha tenido numerosas modificaciones. Tiene varios aspectos que sirven de marco o regulan cuestiones de varias industrias culturales anteriormente analizadas. Es que su análisis es transversal en cuanto regula todo lo atinente a la protección de derechos de autor, independiente de la actividad.

Su alcance es para todas las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación; las compilaciones de datos; las obras dramáticas, composiciones musicales, o dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en síntesis, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción.

El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma

En general, la propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos hasta 70 años posteriores a la muerte del autor.

La transversalidad de esta ley se puede percibir claramente. La ley especifica que no se considera colaboración la mera pluralidad de autores, sino en el caso en que la propiedad no pueda dividirse sin alterar su naturaleza. En las composiciones musicales con palabras, la música y la letra se consideran como dos obras distintas (o sea una de la industria musical y otra de la literaria).

También determina que los colaboradores en una obra cinematográfica tiene iguales derechos, considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película. Y cuando se trata de una obra cinematográfica musical, en que haya colaborado un compositor, éste tiene iguales derechos que el autor del argumento, el productor y el director de la película.

El productor de una película cinematográfica, tiene facultad para proyectarla, aún sin el consentimiento del autor del argumento o del compositor, sin perjuicio de los derechos que surgen de la colaboración. En tanto, el autor del argumento tiene la facultad exclusiva de publicarlo separadamente y sacar de él una obra literaria o artística de otra especie. A su vez, el compositor tiene la facultad exclusiva de publicar y ejecutar separadamente la música.

Por otro lado, la Ley también regula los derechos de propiedad de otras industrias culturales que no se analizan en el presente, por desarrollarse fundamentalmente en ámbito privado, como ser los propietarios de publicaciones periódicas o de material fotográfico.

Es especialmente importante y ha requerido la producción de normativa complementaria la parte de la Ley que especifica la autorización de uso de las obras registradas, porque es allí que surge la posibilidad de requerir un pago por el derecho de autor. Dicho derecho en el rubro musical se ha hecho extensivo en primer lugar a los intérpretes y además a los productores de fonogramas, y es aquí donde esta ley más claramente se vincula a la "industria musical". El caso de los productores de fonogramas es similar al de los editores de textos, que sólo tienen los derechos vinculados a la impresión, difusión y venta, sin poder alterar el texto.

En este marco es que entidades privadas como Argentoires, SADAIC, AADI y CAPIF adquieren importancia, ya que a ellos se les confiere operativamente la gestión de percepción al usuario y distribución a sus afiliados de los correspondientes derechos de propiedad intelectual.

La ley también regula los aspectos de la representación, o ejecución pública, que incluye la transmisión radiotelefónica, exhibición cinematográfica, televisión o cualquier otro procedimiento de reproducción mecánica de toda obra literaria o artística.

El organismo que registra y controla los derechos de esta Ley es el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, donde deben depositarse ejemplares de toda obra publicada, dentro de los 3 meses siguientes a su aparición. En el caso de las pinturas, arquitecturas, esculturas, consistirá el depósito en un croquis o fotografía del original, con las indicaciones suplementarias que permitan identificarlas y para las películas cinematográficas, el depósito consistirá en una relación del argumento, diálogos, fotografías y escenarios de sus principales escenas.

Finalmente la Ley tiene un capítulo que establece las sanciones correspondientes a quienes infrinjan sus normas y algunas medidas procedimentales.

Entre las numerosas normas reglamentarias y complementarias de la Ley de Propiedad Intelectual y vinculadas a las industrias culturales podemos rescatar las siguientes:

Ley 20.115, de 1973, que reconoce a la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES) de Protección Recíproca como asociación civil, cultural y mutualista de carácter privado, representativa de los creadores nacionales y extranjeros de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, cinematográficas, televisivas, radiofónicas, coreofónicas, pantomímicas, periodísticas, de entretenimiento, los libretos para la continuidad de espectáculos, se encuentren escritas o difundidas por radiofonía, cinematografía o televisión, o se fijen sobre un soporte material capaz de registrar sonidos, imágenes o imagen y sonido.

Decreto 746/73, que reglamenta los derechos de los intérpretes

Decreto 1671/74, que asigna la representación de los intérpretes argentinos y extranjeros para percibir y administrar las retribuciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual por la ejecución pública, transmisión o retransmisión por radio y/o televisión de sus interpretaciones fijadas en fonogramas y reproducidas en discos u otros soportes, a la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI). Asimismo, asigna la representación de los productores de fonogramas argentinos y extranjeros a la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (CAPIF).

Dicho decreto asignó a la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación (hoy Secretaría de Medios) la fijación y modificación de los aranceles que deberán pagar los usuarios por hacer uso en ejecuciones públicas o difusión por cualquier medio de los discos u otras reproducciones de fonogramas. Además, el decreto establece que la retribución que paguen los usuarios se distribuya un 67 % para AADI y un 33 % para CAPIF.



Ley 25.140, de 1999, que aprueba el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Dicha normativa, permite de manera indirecta actualizar en forma automática variados aspectos técnicos de nuestra vieja Ley, muchos de ellos vinculados a la producción de fonogramas y a la vez garantiza para estos temas definir una base de normativa genérica de carácter internacional.

### **3.- Organización**

Ya se ha visto un análisis por sector cultural de las diversas normas vinculadas a la participación del Estado con políticas de industrias culturales, y se ha podido ver claramente que cada sector tiene una autoridad de aplicación específica, o a veces varias relacionadas entre sí, pero no ha aparecido un organismo que centralice la generación de dichas políticas.

Ahora bien, tal como se anunció en la introducción el PEN tiene un organismo cuya nominación lo vincula directamente a las industrias culturales, aunque sus responsabilidades no sean determinantes como si los son las autoridades de aplicación de leyes.

En el ámbito de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación se ha creado la Dirección Nacional de Acción Federal e Industrias Culturales, cuya responsabilidad primaria es diseñar, elaborar e instrumentar acciones tendientes a promover la participación cultural en todos sus aspectos a través de programas socio-culturales, eventos, seminarios, proyectos, convenios culturales, concursos y ferias artesanales, respetando las especificidades provinciales y regionales y diseñar, implementar y difundir las políticas y acciones tendientes a fomentar y promover el desarrollo de las industrias culturales, en especial aquellas generadoras de plena utilización de los recursos humanos del sector.

Por otro lado se han definido sus acciones:

- Implementar políticas de articulación y complementación entre las distintas jurisdicciones integrantes del sistema federal argentino, promoviendo la ejecución de actividades conjuntas e intercambio con las administraciones regionales, provinciales y municipales.
- Programar, desarrollar, implementar y coordinar todas las acciones relacionadas con el desarrollo y la implementación de los regímenes de premios nacionales y regionales, así como cualquier otra distinción a crearse.

- Elaborar, compilar, procesar, interpretar y analizar la información cultural, coordinando la brindada por todos los organismos responsables en el ámbito nacional e internacional, público y privado,
- Estimular y promover la creación literaria, el desarrollo editorial y el fomento de la lectura, difundiendo las acciones implementadas a tal fin.
- Proponer, planificar y ejecutar estrategias y políticas de producción y promoción en el campo audiovisual, difundiendo su accionar y propendiendo a su integración en el ámbito federal y regional
- Diseñar e implementar políticas que tiendan al estímulo de formas experimentales de expresión que incorporen nuevas tecnologías
- Promover el fortalecimiento de las industrias culturales nacionales, impulsando medidas y acciones tendientes a favorecerlas, estimulando y revalorizando el desarrollo específico de la acción cultural local.
- Impulsar y favorecer el desarrollo de los sectores vinculados a la cultura, propiciando el pleno empleo de los recursos humanos.
- Promover el desarrollo de mercados de productos y artesanías como hechos culturales.
- Proyectar y promover una cultura participativa aplicada a las industrias culturales, organizando y difundiendo las distintas manifestaciones y actividades culturales llevadas a cabo por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, a través de la programación y realización de eventos, seminarios, concursos, programas socio-culturales, convenios y/o cualquier otro medio eficaz, que permita el cumplimiento de los objetivos vinculados con el área.

De este enunciado no surge un poder decisorio directo en la generación de políticas de Industrias Culturales, sino más bien una actividad más vinculada con las necesidades regionales en el ámbito de la cultura. De todos modos su existencia puede ser el paso inicial para encarar en un futuro una acción política focalizada a este importante tema.